



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

RECURSO DE CASACIÓN Num.: 8627/1996

Votación: 05/02/2002

Ponente Excmo. Sr. D. : Antonio Martí García

Secretaría Sr./Sra.: Oliver Sánchez



DOÑA MARIA JOSEFA OLIVER SANCHEZ
SECCION 4ª DEL TRIBUNAL SUPLENTE

Casa Wt
número 862-7/96

DOY FE Y TESTIGO: ...
seguido esta es la ...
, aparecen los siguientes particulares

SENTENCIA

**TRIBUNAL SUPREMO.
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN: CUARTA**

Excmos. Sres.:

Presidente:

D. Juan García-Ramos Iturralde

Magistrados:

**D. Juan Antonio Xiol Ríos
D. Mariano Baena del Alcázar
D. Antonio Martí García
D. Rafael Fernández Montalvo
D. Rodolfo Soto Vázquez**



En la Villa de Madrid, a doce de Febrero de dos mil dos.

Visto por la Sección Cuarta de la Sala Tercera, compuesta por los Excmos. Sres. Magistrados citados del margen, el recurso de casación nº 8627/96, interpuesto por el Consejo Metropolitano de la Horta, que actúa representado por el Procurador Dª. Silvia Albite Espinosa, contra la

MINISTERIO
DE JUSTICIA

sentencia de 29 de julio de 1.996, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, recaída en el recurso contencioso administrativo 2695/93, en el que se impugnaba el Decreto del Ayuntamiento de Ribarroja del Turia de 20 de marzo de 1.993, que declaraba caducada la licencia concedida en su día para la actividad de vertedero, controlado de basuras con emplazamiento en la partida de Basseta Blanca, cuyo titular actual es el Consell Metropolità de L' Horta (CMH).

Siendo partes recurridas el Ayuntamiento de Ribarroja del Turia, que actúa representado por el Procurador D^a. María Granizo Palomeque y D. Rafael Pardo Gutiérrez, representante de Acción Ecologista Asgro, que actúa representado por el Procurador D. Juan Miguel Sánchez Masa.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Consejo Metropolitano de la Horta, por escrito de. 22 de diciembre de 1.993, interpuso recurso contencioso administrativo contra el Decreto del Ayuntamiento de Ribarroja del Turia, de 20 de marzo de 1.993, y tras los trámites pertinentes el citado recurso contencioso administrativo terminó por sentencia de 29 de julio de 1.996, cuyo fallo es del siguiente tenor: "Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Consell Metropolità de L' Horta, contra Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Ribarroja del Turia, de 20 de diciembre de 1993, que resolvía: Declarar caducada la licencia concedida en su día para la actividad de vertedero controlado de basuras, con emplazamiento en la partida de Basseta Blanca, cuyo titular actual es el Consell Metropolità de L' Horta (CHM) por subrogación del Ayuntamiento de Valencia y Fervasa, al resultar acreditado el agotamiento de la capacidad prevista en proyecto técnico que fundamentó la autorización. Se ordena el cierre inmediato del mismo y se encarga a la Policía Local que impida cualquier vertido a partir del momento en que se practiquen las notificaciones pertinentes. Sin

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

hacer expresa imposición de las costas procesales".

SEGUNDO.- Una vez notificada la citada sentencia, el recurrente, por escrito de 11 de noviembre de 1.996, manifiesta su intención de preparar recurso de casación y por providencia de 24 de junio de 1.999, se tiene por preparado el recurso de casación, siendo las partes emplazadas ante esta Sala del Tribunal Supremo.

TERCERO.- La parte recurrente en su escrito de formalización del recurso de casación, interesa: " Que, presentado este escrito y poder adjunto con copias de todo ello, se sirva admitirlo, tenerme por personada y parte en el recurso de casación contra la sentencia nº 718/96 de 29 de julio de 1.996, por interpuesto en tiempo y forma el mismo y previos los trámites de rigor, dicte sentencia por la que estimando los motivos de impugnación, case y anule dicha sentencia y en su lugar dicte otra por la que, estimando la posición de esta parte en todos los aspectos que ha puesto de manifiesto resuelva, acogiéndolos como motivos de casación, que el Tribunal "a quo" incurrió en incongruencia e infracciones de Ley de jurisprudencia al dictar su fallo con pretensión del objeto esencial del recurso fijado por esta parte recurrente en su escrito de interposición y en la demanda, y que no examinó ni resolvió sobre el valor y alcance del convenio de 18/4/1986, dictando el fallo sobre objeto no cuestionado por la demandante cual era la caducidad de la licencia de 15/11/84; y en consecuencia resuelva al casar la sentencia nº 718/96 del Tribunal "a quo" que el convenio interadministrativo de fecha 18/4/1986 firmado por el Ayuntamiento de Ribarroja del Turia y el Ayuntamiento de Valencia (en cuyo lugar se subrogó el CMH) no fue de imposible cumplimiento, y que al contrario, como contrato



MINISTERIO DE JUSTICIA

oneroso otorgó autorización al Ayuntamiento de Valencia para la actividad propia del vertedero de RSU de Basseta Blanca, avalada por la correcta interpretación dimanante de la hermenéutica vinculante de los arts. 1281 y ss del CC que el Tribunal "a quo" desconoció y que, en consecuencia, desde 1.986 hasta la consunción del plazo conveniado de 1 de julio de 1.996, el Ayuntamiento de Valencia (y luego CMH) ejercieron legalmente y no de forma clandestina la explotación del mentado vertedero, y así mismo, que para la declaración de agotamiento de la capacidad del vertedero era necesario haber analizado antes su contendio deduciendo cuál era la capacidad de vertido que autorizaba y vista esa capacidad y la realidad de los vertidos efectuados, es cuando el Tribunal "a quo" pudo declarar agotada o no esa capacidad; y que, como conclusión final y por consiguiente, no es ajustado a derecho declarar el agotamiento de la capacidad autorizada por el convenio de 1.986 en función de la capacidad prevista por la licencia de 15/11/84 y que, como consecuencia, se declare no ajustado a Derecho el Decreto recurrido del Sr. Alcalde de Ribarroja del Turia de fecha 20/12/1993, que ordena la clausura del vertedero en función de las previsiones de la mentada licencia de 15/11/84 desconociendo el convenio, que él mismo firmó, de 18/4/1986".

En base a los siguientes motivos de casación: **"PRIMERO.-** Aspectos a que trascienden los efectos jurídicos de la sentencia y que justifican que sea recurrida. **SEGUNDO.-** Desviación del fallo de la sentencia planteada como objeto de la litis al que precisamente no da respuesta y deja sin resolver, haciéndolo sobre cuestión no planteada por la parte demandante. **TERCERO.-** Resuelve la sentencia las cuestiones de la relación jurídica planteada (las del convenio de 18/4/1986) desde y en base a los datos y presupuestos propios y específicos del contenido de

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

otra relación jurídica (los de la licencia de 15/11/84). **CUARTO.-** Ausencia de aplicación de norma alguna para motivar la descalificación del convenio de 1.986 como concesión de autorización del vertedero y falta de discernimiento interpretativo y de congruencia lógica al valorar la remisión que el preámbulo del convenio hace "al proyecto de explotación en su día aprobado". **QUINTO.-** Carece de coherencia y congruencia racional, siendo contraria a la sana crítica, la sentencia cuando admite expresamente que dos órganos colegiados plenarios, a la vista de que son conscientes de que ya no se podrá legalmente volver a verter más en el vertedero, conciertan un convenio para verte más durante diez años. **SEXTO.-** Interpreta la sentencia una relación contractual en atención a los términos que rigen otra relación contractual distinta y ente distintos contratantes, e incurre en contradicción utilizando una tesis y su contraria. **SEPTIMO.-** Infringe la sentencia todo el bloque interpretativo de los contratos que impone el art. 1281 y ss del CC referido a los actos coetáneos, posteriores e incluso anteriores".

CUARTO.- El Ayuntamiento de Ribarroja del Turia, en su escrito de oposición al recurso de casación, interesa su desestimación, alegando en síntesis, que la sentencia recurrida ha resuelto adecuadamente la cuestión planteada y que todo el esfuerzo del recurrente va dirigido a mantener que el Convenio celebrado el 18 de abril de 1.986, con posterioridad por tanto a la licencia de 1.984, sustituye a esta y legaliza el vertedero hasta el año 1.996, y ello no es posible porque la actividad necesitaba licencia y esta era la de 1.984, estando el convenio sujeto a las previsiones de la licencia, al proyecto de explotación general en su día aprobado como se advierte de los propios términos del convenio.

QUINTO.- La otra parte recurrida, D. Rafael Pardo Gutiérrez, en su escrito de oposición al recurso de casación, interesa su desestimación, alegando en síntesis, por un lado que el recurso es inadmisibile por razón de la cuantía, conforme al artículo 93 de la Ley de la Jurisdicción, por

MINISTERIO
DE JUSTICIA

otro, que no concurre la incongruencia que el recurrente denuncia por razón de que la sentencia recurrida ha resuelto las cuestiones planteadas y conforme a reiterada jurisprudencia, que cita, el Tribunal no tiene que resolver y valorar, agotadoramente todas las cuestiones planteadas, aparte de que la congruencia es entre el suplico de la demanda y el fallo; que algunas de las cuestiones se plantearon en el escrito de conclusiones y en fin, porque es el Alcalde y no el Ayuntamiento el que tiene competencia para declarar la caducidad de la licencia y que tratándose de una actividad clasificada que necesita licencia su ejercicio está condicionado a la existencia de licencia y no se puede obviamente sustituirse por un mero acuerdo entre las partes, aunque se trate de dos Corporaciones públicas.

QUINTO.- Por providencia de 19 de diciembre de 2.001, se señaló para votación y fallo el día cinco de febrero de dos mil dos, fecha en que tal diligencia ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. **ANTONIO MARTÍ GARCÍA**,
Magistrado de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia que es objeto del presente recurso de casación, desestimó el recurso contencioso administrativo y confirmó la resolución impugnada, que había declarado la caducidad de la licencia para la actividad de vertedero, por agotamiento de la capacidad prevista en el proyecto técnico que fundamentó su autorización, valorando en sus Fundamentos de Derecho lo siguiente: "**SEGUNDO.-** Por las partes se admite que: el 15 de noviembre de 1984 fue concedida por el Ayuntamiento de Ribarroja del Turia, la licencia de actividad para el vertedero controlado de basuras, con emplazamiento en la partida de Basseta Blanca, al efecto

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

solicitada por el Ayuntamiento de Valencia y Fervasa. Por la Comisión Provincial de Calificación de Actividades, se calificó como molesta, insalubre y nociva. En el decreto de concesión de licencia se recogió expresamente, que ésta quedaba condicionada a la adopción de las medidas correctoras que constan en la Memoria del proyecto. La autorización se concedió con sujeción al proyecto técnico redactado por el Ingeniero D. Ramón Martínez Ramón, visado por la Comisión Provincial de Calificación de Actividades con fecha 15 de noviembre de 1984 (folios 43, 44 y 45 del expediente administrativo, Cuerpo 1). El apartado 1.3.2. Capacidad del Vertedero. Duración, preveía una capacidad para $290.080 \text{ m}^3 = 0,29 \text{ Hm}^3 = 130.536 \text{ Tm}$, y una vida del vertedero ligeramente superior al año; y si continuase la incineración de rechazos al ritmo con que se venía operando en la planta de reciclaje y compostaje, el total de basuras vertidas se reduciría en 30.079 Tm/año , con lo que el vertido total anual sería de 92.753 Tm/año y la duración del vertedero sería sensiblemente superior al año (17 meses de duración aproximada). Por las partes no se discute la necesidad de licencia de actividad para la utilización del vertedero. TERCERO.- En fecha 18 de abril de 1986 se formalizó un Convenio de Cooperación entre el Ayuntamiento de Valencia y el de Ribarroja del Turia, relativo al vertido controlado de residuos sólidos, por el cual el Ayuntamiento de Ribarroja del Turia se compromete, a "garantizar mediante decidida voluntad política y todos los medios legales a su alcance, el vertido controlado de Basseta Blanca, durante la vigencia del presente convenio"; en la cláusula sexta se fijaba la vigencia del convenio en diez años, contados a partir del 1 de julio de 1986; pactándose en el mismo que el Ayuntamiento de Ribarroja percibiría 1.200.000 pesetas mensuales durante los meses de explotación del vertedero controlado. El

MINISTERIO
DE JUSTICIA

mencionado convenio fue ratificado por el Pleno de los referidos Ayuntamientos de Ribarroja y Valencia, respectivamente, el 15 y 18 de septiembre de 1986. El CMH se subrogó con posterioridad en todos los derechos y obligaciones derivados del convenio, del Ayuntamiento de Valencia, en virtud del convenio marco de 28 de julio de 1989 suscrito entre el Ayuntamiento de Valencia y el órgano metropolitano. CUARTO. - Según el preámbulo del convenio, su finalidad es garantizar la utilización del vertedero controlado de Basseta Blanca, siguiendo el proyecto de explotación general en su día aprobado. De lo que se deduce que no puede considerarse el convenio como concesión de licencia de actividad; así, no tiene proyecto (se remite al anteriormente existente con arreglo al cual se concedió la licencia de 15 de noviembre de 1.984) que prevea la capacidad del vertedero; no pudiendo tomarse como tal la recogida en las condiciones técnicas aprobadas por el Ayuntamiento de Valencia para la concesión de la explotación, pues no se recogen en el convenio, ni este hace remisión a las mismas. Admitido por el CMH que el plazo de duración y capacidad prevista, objeto de la licencia de 15 de noviembre de 1.984, quedaron agotados en 1.986, y de conformidad con lo anteriormente expuesto, ya sería motivo suficiente para desestimar el recurso. Pero es que además, y cualquiera que fuere la incidencia del convenio de 1.986 en la cuestión planteada, si se hubiere agotado la capacidad del vertedero, aquel sería de imposible cumplimiento, lo que sería también motivo de clausura del vertedero, imponiendo declararlo así el interés público y de simple legalidad; con independencia de los efectos jurídicos que el mencionado convenio pudiera producir entre los Ayuntamientos que lo suscribieron. QUINTO. Con el informe de los técnicos del Ayuntamiento de Ribarroja de 21 de octubre de 1.993

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

(folios 102 a 105 del expediente administrativo, Cuerpo 2), según el que de los datos suministrados por el CMH y de los cálculos por ellos realizados - ritmo de vertido a razón de 425.000 Tm/año; según vuelo fotogramétrico realizados a últimos de 1.991, se observa un exceso en esa fecha sobre la capacidad total prevista para el agotamiento de aproximadamente 2.280.000 m³; y según el ritmo estimado de vertido, el exceso en la actualidad; sobre la capacidad total del vertedero, seria de 3.932.000 m³ aproximadamente- el vertedero se halla agotado; se debe concluir con el agotamiento y saturación del vertedero Basseta Blanca al tiempo de adoptarse la resolución recurrida; y ello aún admitiendo que la capacidad prevista en el convenio fuera la del proyecto técnico aprobado por el Ayuntamiento de Valencia -Pliego de Condiciones- del contrato de adjudicación de vertidos de residuos de residuos sólidos de 26 de junio de 1.986 (120.000 Tm/año). Sin que el demandante haya acreditado con prueba suficiente lo contrario."

SEGUNDO.- Es procedente en primer lugar, desestimar la alegación que sobre inadmisibilidad por falta de cuantía aduce una de las partes, pues aparte de que se trata de una mera alegación, no hay que olvidar que el asunto era de cuantía indeterminada y que en todo caso la naturaleza del asunto, caducidad de licencia y la importancia de la actividad a que se refiere notoriamente excede de los límites establecidos por el artículo 93 de la Ley de la Jurisdicción.

Y sentado lo anterior, antes de entrar en el análisis de los motivos de casación, resulta obligado, por su conexión con la presente litis, referir, que esta Sala por sentencia de 25 de julio de 2.000, ha desestimado el recurso de casación 2075/96, interpuesto por la representación procesal del Consell Metropolità de L'Horta contra la sentencia de 12 de diciembre de 1.995, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal



MINISTERIO DE JUSTICIA

Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que había declarado extinto el contrato concesional para el vertido de residuos sólidos urbanos en el vertedero conocido como Basseta Blanca, por causa de agotamiento y saturación del referido vertedero, siendo el primero de los Fundamentos de Derecho de la citada sentencia de 25 de julio de 2.000 del siguiente tenor: "PRIMERO.- La Sentencia de instancia considera probado, primero, que en 26 de junio de 1.986 el Ayuntamiento de Valencia adjudicó al recurrente, Don [REDACTED] el contrato de vertidos de residuos sólidos en el vertedero Basseta Blanca, incluyéndose como cláusula 30 del pliego de condiciones la que establecía que la duración del contrato sería de diez años contados a partir del inicio de la fecha de la explotación como vertedero o hasta que, a juicio de la Delegación de Saneamiento, se hubiera llegado a la saturación del mismo; segundo, que los derechos derivados de la explotación del vertedero fueron transferidos por el Ayuntamiento al "Consell metropolità de L'Horta" mediante Convenio Marco de 30 de abril de 1.990; tercero, que con fecha 25 de julio de 1.992, a resultas de una resolución dictada por el Consell en relación con cierto tema de horario, el demandante pidió en un otrosí segundo la resolución y extinción del convenio concesional por haberse rebasado con exceso el volumen y capacidad del vertido; cuarto, que impugnada ante la jurisdicción contencioso administrativa la denegación presunta, por silencio administrativo, de esta petición, la Sala entendió que la capacidad del vertedero estaba ampliamente superada, por lo que estimó el recurso, declarando extinguido el contrato por el agotamiento y saturación de aquel."

TERCERO.- Alega el recurrente hasta siete motivos de casación, precedidos de una exposición general en la que al amparo del nº 4 del artículo 95.1 de la Ley de la Jurisdicción, identifica los contenidos de los distintos motivos de casación, si bien mas tarde, al exponer cada motivo de casación, a salvo el primero, precisa que lo hace al amparo del nº 3 y 4 del artículo 95.1 de la Ley de la Jurisdicción, lo que dificulta el análisis.

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

Por otro lado y pese al evidente esfuerzo procesal del recurrente, como en el desarrollo de cada motivo de casación, utiliza la técnica propia de un recurso de apelación, haciendo una exposición prolija de lo pedido en la Instancia y de lo que el entiende que la sentencia ha debido valorar y no ha valorado, resulta aún más dificultoso el análisis que corresponde a un recurso de casación, máxime, cuando en casi todos los motivos de casación se parte de la tesis de que son cosas distintas la licencia otorgada para la actividad de vertedero en 1.984 y el convenio posterior de 1.986, que estima es o se ha de tener por una nueva licencia, lo que la Sala de Instancia no acepta, de lo que se ha de inferir que tanto explícita como implícitamente está resolviendo las cuestiones planteadas.

Y al respecto conviene recordar que conforme a reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, entre otras en sentencias de 25 de abril de 1.994 y 25 de marzo de 1.996, los órganos judiciales, no están obligados a un razonamiento explícito, exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener sobre la cuestión, y si a valorar y resolver explícita o implícitamente las pretensiones formuladas, en relación con el acto impugnado, concretando las razones y motivos que conducen al fallo, a fin de que las partes puedan conocerlas y articular adecuadamente sus medios de defensa, y estas exigencias si que las cumple con suficiencia la sentencia recurrida, otra cosa es que el recurrente esté o no conforme con la solución dada por la sentencia recurrida, pero por ello no se puede alegar ni indefensión, ni el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales.

CUARTO.- No obstante lo anterior, esta Sala tratará de indagar en el escrito de formalización del recurso de casación y analizar, las distintas alegaciones aunque reagrupándolas, a fin de evitar repeticiones innecesarias.

Es de señalar, en primer lugar que la sentencia recurrida ha valorado y razonado con detalle y suficiencia la razón por la que confirma



MINISTERIO DE JUSTICIA

el acuerdo impugnado, que declara la caducidad de la licencia para la actividad de vertedero, el agotamiento del mismo, que era una causa de extinción prevista, exponiendo las razones y datos que ha tenido en cuenta, para acreditar tal agotamiento y por tanto desde esa perspectiva no cabe aceptar ninguna alegación sobre incongruencia o falta de motivación y procede desestimar por tanto los motivos de casación a que tal cuestión se refieren.

Por otro lado, la sentencia declara que la única licencia era la otorgada en 1.984, y que el convenio posterior de 1.986, no tiene el carácter de licencia y que estaba subordinado a las previsiones del proyecto de explotación que justificó la licencia, y esa declaración de la sentencia recurrida se ha de estimar ajustada a derecho, sin que quepa aceptar por tanto ninguna de las alegaciones que sobre ese particular se aducen en los motivos de casación. Pues tratándose como se trata de una actividad clasificada como la actividad de vertedero, es claro que precisa de la oportuna licencia, tras el procedimiento exigido, entre otros incorporación del proyecto de explotación, y esa exigencia de licencia no puede sustituirse, validamente, en ningún caso por el acuerdo entre dos Corporaciones, y por tanto el convenio que con posterioridad a la primitiva licencia celebraron las dos Corporaciones trae su causa de la licencia de 1984 y estaba sujeta, como además lo dice el convenio y la sentencia recurrida refiere, al proyecto de explotación de la única licencia, sin que se pueda entender, como el recurrente aduce, que la primitiva licencia estaba caducada y se sustituyó por el convenio posterior, pues sin licencia no podía haber acuerdo para el funcionamiento del vertedero, otra cosa es que se pudiera prorrogar la licencia por el convenio y las actuaciones que en el se preveían, pero siempre con el límite del agotamiento del vertedero, que es lo que valoró la sentencia recurrida, por lo que procede desestimar los motivos de casación que a tal cuestión se refieren.

Por último se ha de señalar, que si conforme al artículo 6 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, es

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

el Alcalde el competente para la concesión de licencias, y si conforme al artículo 38 del citado Reglamento aprobado por Decreto de 20 de noviembre de 1.961 nº 2414/61, corresponde al Alcalde, disponer la retirada temporal o definitiva de la licencia, es claro que también el Alcalde está facultado para declarar la caducidad de la licencia por cumplimiento de las condiciones en la misma establecida, además de que tal potestad también aparece reconocida, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales, artículo 41 y en el Reglamento de Servicios, artículos 15 y 16, entre otros.

QUINTO.- Además de que las anteriores valoraciones ya obligan a desestimar el recurso de casación, no conviene olvidar que a similar solución lleva la valoración de la doctrina sentada por esta Sala en la sentencia de 25 de julio de 2.000, más atrás citada, pues el recurrente parte en el análisis de los motivos de casación de la vigencia del convenio de 1.986, y de la necesidad de que así lo hubiese valorado la sentencia aquí recurrida, y el tal convenio fue declarado extinto por la propia Sala en otra sentencia y confirmado por la del Tribunal Supremo de 25 de julio de 2.000, y al estar declarado extinto y sin efectos el tal convenio, no se puede pretender en este recurso de casación que se declare su vigencia, validez, ni que produzca efectos con posterioridad a su extinción, declarada por sentencia firme.

SEXTO.- Las valoraciones anteriores obligan, conforme a lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley de la Jurisdicción, a declarar no haber lugar al recurso de casación, con expresa condena en costas a la parte recurrente.

F A L L A M O S

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de



INISTRACION
E JUSTICIA

casación, interpuesto por el Consejo Metropolitano de la Horta, que actúa representado por el Procurador D^a. Silvia Albite Espinosa, contra la sentencia de 29 de julio de 1.996, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, recaída en el recurso contencioso administrativo 2695/93, que queda firme. Con expresa condena en costas a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de la misma, Excmo. Sr. D. Antonio Martí García, hallándose celebrando audiencia pública, ante mí, el Secretario. Certifico.

Lo testimonio con acuerdo bien y fielmente con su original al que me remito, y para que conste a los oportunos efectos, expido el presente en Madrid, a 14 de Enero de 2003

LA SECRETARIO



②

RQ. núm. : 01 / 0002695 / 1993

Demandante: CONSELL METROPOLITÀ DE L' HORTA

Procurador: D/ña. JOSE JOAQUIN PASTOR ABAD

Demandado:

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA

A U T O

Ilmos. Sres.:

Presidente:

D. JOSE DIAZ DELGADO

Magistrados:

D. JUAN LUIS LORENTE ALMIÑANA

D. CARLOS ALTARRIBA CANO

En Valencia, diecisiete de Enero de Mil
novecientos noventa y cuatro.

Dada cuenta; lo precedente únase, y

H E C H O S

PRIMERO. - Por el recurrente en su escrito de fecha 23 de Diciembre se ha solicitado la suspensión del Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ribarroja del Turia de fecha 20 de Diciembre de 1993, por el que se declara caducada la licencia concedida en su día para la actividad del Vertedero Controlado de basuras, con emplazamiento en la partida de Basseta Blanca, cuyo titular actual es el Consell Metropolità de l'Horta por subrogación del Ayuntamiento de Valencia y FERVASA, al resultar acreditado el agotamiento de la capacidad prevista en el proyecto técnico que fundamentó la autorización, se ordena el cierre inmediato del mismo y se encarga a la policía

local que impida cualquier vertido a partir del momento en que se practiquen las notificaciones pertinentes.

SEGUNDO. - Formada pieza separada y ordenado el traslado de la petición a la parte demandada, ésta presentó escrito de alegaciones del contenido literal que consta en autos.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO. - La inmediata ejecutividad de los actos administrativos, establecida en el art. 122 de la LJCA en razón de la presunción inicial de legalidad de los mismos y de la autotutela decisoria y ejecutoria que la Administración pone en juego para su adopción, viene siendo afectada, incluso en el ordenamiento jurídico preconstitucionalidad, por una tendencia de progresiva reducción en su alcance y eficacia, hasta el punto de que, frente a la formulación originaria del art. 122 citado, es de destacar que, como resalta la sentencia de la Sala 5ª del Tribunal Supremo de 17 de julio de 1982 (entre otras), ya los arts. 33 y 34 de la JRJAE de 26 de julio de 1957 dejan a salvo del principio general los casos en que una disposición ordene lo contrario y, poco después, el art. 116 de la LPA de 17 de julio de 1958, en su reforma de 2 de diciembre de 1963, añade, a los fundamentos clásicos de potenciales daños y perjuicios de imposible o difícil reparación para el recurrente, el más reglado y objetivo de que la impugnación se funde en los supuestos de nulidad absoluta del art. 47 de dicha ley, llegándose, por fin, en el art. 7 -49 de la ley 62 /1978, de 26 de diciembre, sobre protección jurisdiccional de derechos fundamentales de la persona; a sentar, prácticamente, la regla contraria a la primeramente expuesta, en cuanto la Sala debe acordar la suspensión del cumplimiento del acto impugnado, salvo que se justifique la existencia o posibilidad de perjuicio grave para el interés general.

SEGUNDO. - En el vertedero controlado de basuras, con emplazamiento en la partida Basseta Blanca, cuya titularidad la ostenta el Consell Metropolità de L'Horta, se depositan las basuras recogidas en la ciudad de Valencia y demás poblaciones que componen el Consell, y su cierre significaría la privación del servicio público de recogida de basuras en dichas ciudades y poblaciones, lo que podría incidir en la sanidad pública; además de la repercusión en las empresas que prestan el servicio. Ahora bien, la saturación del vertedero, y la falta de soluciones alternativas podría producir efectos desfavorables en el medio ambiente, por lo que procederá recabar de la Conselleria de Medio Ambiente informe sobre:

- A) Estado actual del Vertedero Basseta Blanca.
- B) Riesgo higiénico-sanitario que presenta en estos momentos el vertedero y medidas urgentes a adoptar en su caso, en evitación de cualquier peligro.
- C) Evaluación del impacto ambiental y paisajístico con

(3)

propuesta de medidas para la recuperación integral de la zona, o sobre cuantos extremos pudieren proponer las partes y se estimasen pertinentes.

TERCERO. - En el presente proceso, sujeto a las normas genéricas de la LJCA, las circunstancias del caso y lo alegado por las partes en este plea separada determinan la imperiosa necesidad (o, al menos, conveniencia) de la suspensión solicitada, porque, de acuerdo con la línea normativa antes expuesta y con abstracción de que la impugnación se fundamente o no con carácter predominante en la nulidad de pleno derecho del acto, es evidente que, de no adoptarse la solución de paralizar su ejecutividad, podrían producirse graves daños o perjuicios de reparación imposible o difícil para los intereses y derechos de la parte recurrente.

Por lo expuesto procederá acordar la suspensión del acto, sin perjuicio de que una vez emitido el informe a que se refiere el fundamento segundo, por la Conselleria de Medio Ambiente, pueda revisarse dicha suspensión.

LA SALA ACUERDA decretar la suspensión de la ejecución del acuerdo recurrido, sin fianza alguna. Sin perjuicio de que emitido por la Conselleria de Medio Ambiente el informe a que se refiere el anterior Fundamento, pueda, previa audiencia de las partes, revisarse el presente auto.

Esta resolución no es firme y frente a la misma cabe recurso de súplica ante la propia Sala, que ha de interponerse en el plazo de cinco días.

Lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos Sres. Jueces. Certifico

SENCIA. - Seguidamente se cumple lo mandado y pasa a la Sala. Doy fe.

